

El insurgente

ORGANO DE ANALISIS Y DIFUSION DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO Y DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

AÑO 15
NUM. 136
OCTUBRE DE 2011

¡2 DE OCTUBRE NO SE OLVIDA!

INDICE:

EDITORIAL

La insistencia del Ejecutivo al Legislativo para que se aprueben las reformas neoliberales de manera urgente y sin mayor discusión obedece a una concepción de totalitarismo político, en donde finalmente el Legislativo tiene que subyugarse al Ejecutivo.

En conjunto las pretendidas reformas persiguen el objetivo de defender a ultranza los intereses del capital y la oligarquía mexicana, para perpetuar la explotación de la mayoría de los mexicanos por un puñado de empresarios multimillonarios coludidos con el capital transnacional.

El argumento casi perfecto para lograr estas pretensiones es elevar la seguridad pública a fetiche como condición del desarrollo económico, está en puerta como espada de Damocles la imposición de un Estado policiaco-militar; la legalización política y jurídica de un Estado dictatorial, la instauración de un régimen de excepción permanente que anula de facto derechos y libertades políticas. Se pretende subyugar a los diferentes sectores de la sociedad mexicana a los intereses del capital.

La agresión permanente contra el pueblo bajo el pretexto del combate contra el narcotráfico es parte del terrorismo de Estado que el gobierno calderonista ejerce a través del aparato represivo (policías, marina, ejército), obedeciendo a una estrategia de contrainsurgencia exigida por la administración norteamericana, parte nodal del Plan Mérida, en donde el paramilitarismo es política de Estado.

La existencia y utilización de grupos paramilitares creados, estructurados y dirigidos por el aparato represivo ha sido una constante en la política represiva de los gobiernos priístas y panistas, falso es el argumento que niega la existencia de los grupos paramilitares, pero más perverso resulta aceptarlo a medias y vincularlos únicamente al narcotráfico y grupos delincuenciales. La verdad histórica es que en estos momentos los grupos paramilitares creados desde las instituciones del gobierno y por empresarios pudientes operan impunemente al amparo de la protección del Estado mexicano y su aparato represivo.

Grupos paramilitares que operan bajo la lógica de la delincuencia organizada para justificar la represión política y el terrorismo de Estado, que para su financiamiento de su operatividad recurren a actividades delincuenciales, a parte del financiamiento del aparato represivo, de las corporaciones trasnacionales y grandes empresarios del país.

Cada vez es más difícil para el gobierno calderonista ocultar la responsabilidad material e intelectual de estos grupos en las detenciones y ejecuciones extrajudiciales, así como de los miles de desaparecidos que existen en el país.

Cada vez queda más claro que para enfrentar la violencia institucional ya sea formal e informal la autodefensa armada de las masas sigue constituyendo una necesidad política de primer orden; la violencia desde el Estado ya sea formal e informal no se le detiene con buenos deseos, tampoco con sentimientos de amor y paz. El pueblo, sus organizaciones y luchadores sociales debemos avanzar a la comprensión de la necesidad política de organizar la protección colectiva por todos los medios disponibles y necesarios.

A la par de la construcción de los mecanismos de la autodefensa colectiva debemos avanzar en la construcción del sujeto revolucionario, con las características apropiadas y capacidades que permitan resolver las necesidades históricas de nuestro pueblo.

pdpr-epr



EL FETICHE DE LA SEGURIDAD PÚBLICA



Las clases explotadas y oprimidas que conforman la inmensa mayoría de la población mexicana, día a día ven cómo los lacayos de la democracia burguesa postran al explotado y oprimido a la dictadura del capital. No importándoles en absoluto las paupérrimas condiciones materiales de existencia de por lo menos el 90% de la población mexicana, orquestan brutales políticas y mecanismos opresores en santa defensa de los intereses oligárquicos, en consecuencia de la propiedad privada.

Tanto los que se autodenominan de izquierda y se desenvuelven en la práctica social como liberales pequeñoburgueses o empedernidos conservadores funcionales a los intereses imperialistas, como aquellos de derecha que son bien conocidos por su práctica fascista y doble moral, actúan en defensa de los intereses oligárquicos. Desde el más timorato de los lacayos hasta el más hipócrita representante de la democracia burguesa, anquilosados en cada rincón de las instituciones burguesas que dan forma a la maquina opresora del Estado burgués, ofrecen al pueblo explotado y oprimido el fetiche de la seguridad pública como garantía infalible para mejorar sus condiciones de vida.

¿En qué aspecto mejora la vida del desposeído de los medios de producción, del excluido de la riqueza social, del oprimido, el asalariado, el campesinado empobrecido y demás sectores populares, el aceptar la subordinación tacita a la constitucionalidad e institucionalidad burguesa y al capital? en nada, al contrario, los atan a la dictadura del capital para condenarlo a una vida paupérrima.

Se habla de seguridad pública como si la sociedad capitalista en la que vivimos fuese una sociedad homogénea y sin contradicciones, sin clases sociales; como si el Estado actual no fuese la máquina de opresión de la clase burguesa sobre los explotados y oprimidos; como si el Estado con su ley burguesa no tuviese como

único interés la defensa de la propiedad privada capitalista y el interés particular que de ella emana.

Se habla de una “crisis de violencia” como si la violencia se reprodujera así misma, fuese apolítica e independiente del ciclo económico, se plantea el problema como un fenómeno que se reproduce fuera del Estado burgués y sin la existencia de ninguna conexión causalistica entre la explotación, la opresión y el sujeto social que encarna estas relaciones sociales como explotador y opresor. Si se ve el origen y el carácter de la violencia que priva en el país, lo que se observa es la violencia del estado burgués en contubernio a oligarcas imperialistas, en suma, el terrorismo de Estado.

Terrorismo de Estado que responde a la agudización de las contradicciones y la lucha de clases, producto de la enconada crisis estructural del sistema capitalista que atañe hoy en día a la humanidad entera. En México, la ley general de acumulación capitalista, las contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción se manifiestan claramente en la polarización de la sociedad mexicana, en consecuencia, las inherentes contradicciones y lucha de clases hace del movimiento popular, la toma de conciencia proletaria y la revolución socialista en lo inevitable, por lo que el terrorismo de estado a de confrontarse tarde o temprano con la legítima e histórica violencia revolucionaria.

La militarización del país con el despliegue de las fuerzas armadas en las calles como el ejército mexicano, la marina, cuerpos policiaco-militares y grupos paramilitares no responden al bienestar del pueblo ni al afanado desarrollo sin adjetivos, puesto que, el desarrollo que hoy se vive es el desarrollo burgués, cosa que ya no corresponde a las necesidades del propio desarrollo de la humanidad.

La evidencia de la caducidad del modo de producción capitalista la encontramos en el enconamiento de la crisis estructural del capitalismo en su conjunto y en su particularidad en México; en la ofensiva imperialista con las guerras de rapiña como política para resolver la crisis, la implantación del terror como medida de sojuzgamiento y opresión, políticas que en los gobiernos serviles al imperialismo reproducen de forma apológica, tristemente es el caso de México.

En México, la militarización de todo el territorio; la imposición de políticas económicas y jurídicas acorde intereses oligárquicos y imperialistas; sirven para el control absoluto de la sociedad, el saqueo indiscriminado por medio de la acumulación originaria, el acrecentamiento de la tasa general de ganancia con la profundización de la explotación, la concentración y centralización del poder económico y político de la ultraderecha con su respectiva oligarquía.

Hablar de la seguridad pública a secas, como medida para el combate a la delincuencia organizada, es hablar burlonamente al pueblo. Los conceptos de seguridad pública, delincuencia organizada, inseguridad pública,



crisis de violencia… tal como los percibe el Estado y las concepciones burguesas son el reflejo de un fetiche.

Fetiche que se enmarca en una de las tantas patrañas parlamentarias, quimeras democráticas y huecos discursos económicos ajenos a toda realidad objetiva que sirven para legitimar y justificar la explotación, la opresión, el saqueo y todo tipo de crímenes cometidos por el capital.

El fetiche de la seguridad pública forma parte de los mecanismos de opresión utilizados por el Estado burgués, ya que allana el camino para la imposición de políticas fascistas como garantes del capital para que se profundice tanto la explotación como la opresión de las clases explotadas, concretizándose en medidas inauditamente represivas que dan lugar a crímenes de lesa humanidad, medidas que son avaladas por la constitucionalidad burguesa con sus afanadas reformas, entre las que se encuentran la ley de seguridad nacional y el proyecto de reforma del código federal de procedimientos penales.

Tanto la ley de seguridad nacional como el proyecto de reforma del código federal de procedimientos penales, buscan justificar con la institucionalidad burguesa lo que en la práctica cotidiana, el Estado burgués mexicano con sus cuerpos represivos y grupos paramilitares vienen desempeñando: el terrorismo de estado.

En efecto, resulta ser que el fetiche de la seguridad pública, es una característica de un estado policiaco-militar, fetiche que enmascara el conjunto de contradicciones y la descomposición de la sociedad burguesa; por medio del cual los lacayos de la democracia burguesa se disfrazan de sujetos sin intereses clasistas, cuando en realidad velan por los intereses de los explotadores y opresores.

Si bien los lacayos de la democracia burguesa, categóricamente se representan en el Estado y éste como categoría representativa del capital, no los elude de la responsabilidad ante la sociedad como individuos, como tales, también deben ser juzgados, por lo que es menester recordar lo que se planteó en un comunicado de nuestro partido revolucionario, que señala lo siguiente: “Toda aquella persona de izquierda que olvide que el principal problema del país es la miseria y la desigualdad social y no la delincuencia, que plantee como objetivo la seguridad pública como condición necesaria para el desarrollo actúa bajo el fetiche legitimador y convalida las pretensiones de la ultraderecha. En consecuencia, los pasos que va dando son en dirección contraria a la izquierda.” A tal planteamiento se puede agregar que en absoluto, no transforma en nada a la sociedad burguesa, lejos de ser progresista ni mucho menos revolucionario, se es un empedernido conservador de los intereses imperialistas.

pdpr-epr

EL LENGUAJE DE LA PAZ

La actual crisis estructural del capitalismo ha dejado ver a nivel mundial diferentes peculiaridades de una evidente decadencia sintomática del llamado mundo globalizado, no en su función de rapiña como modelo útil al capitalismo, sino más bien como pretendida concordia y paz entre las clases sociales con el estado de bienestar. Cosa que no hace más que confirmar el inicio de un estado de putrefacción del propio capitalismo a través de sus distintas particularidades que ha engendrado.

Tanto a nivel mundial como nacional podemos confirmar esta tesis, donde inevitablemente la realidad en sus distintas expresiones termina por imponerse de forma tal que sólo basta hacer uso de razón en forma común para llegar a la conclusión que, de forma general, la sociedad capitalista se encuentra en descomposición económica, en tanto que sus relaciones sociales de producción ya no obedecen a una necesidad histórica y a una realidad económica. La burguesía mundial y las distintas oligarquías nacionales están jugando el mismo papel parasitario que jugaba la nobleza feudal en el siglo XVIII, momento histórico en que estalló la revolución francesa símbolo de la generalización de las revoluciones democrático-burguesas.

Las distintas eventualidades sociales a nivel mundial, sobre todo en Europa, y en el propio EU, hacen suponer de forma simple y sin mayor esfuerzo tiempos de cambio. Y esta lógica tan simple que nos ha mostrado cómo históricamente la burguesía desplazó a la nobleza feudal, ahora nos muestra este mismo fenómeno y proceso en nuestra época. En nuestro país esta realidad se refleja, entre otras cosas, en la fermentación política producto de esta descomposición económica mundial, donde se ha hecho de la violencia el medio fundamental de subsistencia del Estado, en medio de la más precaria situación económica del pueblo, traducida en miseria.

Producto de estas condiciones socioeconómicas, en estado crítico, se ha llegado a confundir deliberada u omisamente la violencia como medio para considerarla como poder que determina todas las relaciones sociales, imponiéndose sobre la sociedad; siendo que la violencia como poder depende del poder económico que le sostiene. Así tenemos que, lejos de toda realidad, se concibe a la violencia como un poder que existe por sí mismo, con independencia de toda relación socioeconómica.

Este poder de la violencia, que nunca deja de ser un medio que persigue fines meramente económicos en el fondo, dado su carácter y origen trata de ser legitimado con una figura tan ya conocida en la historia y en nuestra sociedad que sólo confirma lo antes dicho: la militarización. Hecho que de facto ya nos dice algo: la argumentación y práctica fascista sobre la seguridad está vigente a manos de la ultraderecha en México.

Oficializada así la violencia, o más precisamente legitimada y/o legalizada al servicio del Estado, o su pretensión, queda claro cuál es su origen y fin, convirtiéndose de esta forma en un problema de seguridad para el Estado. La realidad que se oculta tras la visión apologista de la seguridad como poder que existe por sí mismo y por encima de todo interés, es a todas luces una realidad de precariedad económica y descontento popular, que aloja en sí misma la solución a esta descomposición económica, política y social.

Esta realidad ha sido distorsionada y torcida por la visión fascista del siglo XXI, y en su argumentación falaz sobre la violencia ha arrastrado a la opinión publica convirtiendo al lenguaje de la paz en la única solución para el pueblo, al mismo tiempo que siembra la violencia y el terror contra éste, pretendiendo con esto hacer partícipe al pueblo de tan torcida maquinación y convencerlo enfermizamente de tomar defensa de intereses que no son suyos. Tal es el caso del ejército cuyas filas son engrosadas por hijos del pueblo que asesinan a su propio pueblo.

De la violencia se ha hecho una lógica perversa, o al menos eso se pretende, pues ya que a ésta sólo se puede oponer, desde la visión torcida del fascismo, el lenguaje de la paz por parte de la víctima, el pueblo, hacía su victimario el Estado. Dejándolo así, al menos mediáticamente, en un estado constante de indefensión y anulando de facto su legítima defensa como pueblo, hecho que con el tiempo solo le desmoraliza como ente activo de su propio destino, impedido a actuar con verdadera soberanía. Tal es la verdadera intención del fascismo en México al hablar de la violencia como problema de seguridad, en cualquiera de sus presentaciones discursivas.

Y así, nuestros “filósofos” de la violencia, desde las diferentes tribunas públicas de la oficialidad han hecho toda una tesis filosófica donde se enfrentan contrarios a muerte: por un lado tenemos a la delincuencia organizada en general fungiendo como tesis, a la cual se le opone como antítesis la militarización del país, de cuyo enfrentamiento resulta como síntesis la violencia legítima por parte del Estado. De esta forma “teorética” se justifica el terrorismo de Estado por parte de su patriarca mayor, equivalente al jefe de estado, y todo su sequito que comparte esta visión propia de una secta religiosa, y que han hundido a nuestro país en la sangre y la miseria.

Fuera del Estado y sus representantes sólo se puede hablar y hacer uso de la paz frente a la violencia “legitima” que ejerce el Estado a través de las fuerzas armadas y grupos paramilitares contra el pueblo, se ha criminalizado la legítima defensa del pueblo tratando de hacer de este derecho popular casi un acto inmoral. Y en este afluente tan revuelto se le ha dado a beber al pueblo, a través de los medios afines a la complicidad criminal del Estado, la confusión y confrontación fratricida. A la represión, al asesinato, la desaparición, la tortura, persecución, amedrentación, intimidación, etc. Solo se le puede oponer el lenguaje de la paz, por parte del pueblo, la inacción ante la agresión que poco a poco se convierte en indiferencia acarrea nuevas interrogantes y dilemas que no pocos se esmeran en resolver. ¿Es válido e imperativo para el pueblo actuar pasivamente ante la agresión del Estado? ¿Hasta dónde es necesario llegar para que el pueblo se convenza a sí mismo de que la solución no está en su pasividad? ¿Acaso hace falta su aniquilación, anulación y/o sojuzgamiento absoluta como pueblo para demostrar que desde el “pacifismo” jamás será escuchado?

Ante la gran escalada fascista en nuestro país, que ha permeado a toda la estructura Estatal a través de sus instituciones, ha quedado demostrado de sobra, de múltiples formas y con diferentes sujetos sociales –díganse organizaciones sociales independientes, progresistas, religiosas, pacifistas y hasta grupos revolucionarios- que el Estado es indolente y que convierte al pacifismo en una trampa del que muchos, con las mejores intenciones, hacen su bandera de lucha, y del cual algunos más han priorizado como medida para evitar un derramamiento de sangre. Cosa que al final solo demuestra algo: la dilación de lo inevitable.

Desde luego que es válida la lucha pacifista en México, y en todo el mundo; pero el imperativo a

partir de nuestra realidad, condiciones y circunstancias, es otro muy distinto, a grado tal que se ha convertido en una necesidad la autodefensa popular, ante la agresión del Estado. El pueblo no se puede anular a si mismo conformándose con su dolor de víctima ante su victimario, no es ético para el propio pueblo, ni para nadie en particular, actuar pasivamente e impotentemente mientras el Estado lo amedrenta y asesina constantemente, lamentablemente no bastan las buenas intenciones ni la voluntad abnegada de quien no desea la violencia ni la sangre para la solución de tan lastimosa realidad en la que han sumido a nuestro país los administradores del capital de grandes empresarios nacionales y extranjeros.

Se ha hecho uso de estas buenas intenciones, y de las acciones pacifistas, por parte del Estado de forma tal que ha sacado recurso, o ha capitalizado, para sus intereses militaristas propias del fascismo, al pacifismo en general y a las buenas voluntades, y a todos aquellos que de forma personal realmente pugnan por la paz, usándolo(s) como placebo para acallar y ahogar todo el descontento y exigencias que un pueblo agredido y profundamente lastimado expresa de múltiples formas, solo burla y desprecio velados de diálogo ha recibido a cambio, no dejándole otra opción que lo inevitable: elegir entre ser aniquilado y sojuzgado vilmente viviendo como esclavo consciente de su propio dominio, o bien, ejercer el inalienable derecho de todo pueblo de la autodefensa.

Tal es la realidad que se nos impone desde diferentes ángulos, que si son analizados con un mínimo de racionalidad fácilmente nos llevan a lo mismo: es ineludible recurrir como pueblo, una vez más, a las armas, y resolver de una vez por todas por medios violentos la precaria situación en la que nos encontramos. No porque nos guste la violencia, o el derramamiento de sangre de nuestro pueblo, sino porque se nos ha impuesto como una necesidad histórica de propia existencia popular, se nos impone la lógica sumisa de la seguridad, con la llamada cultura de la legalidad; pero puede más la lógica del derecho y la justicia popular de la legitima defensa a la cual no debemos renunciar como pueblo.

La vigencia de la lucha armada revolucionaria en México está más que demostrada, es tan válida y legitima que ahora se ha convertido en una responsabilidad popular e histórica, a la cual estamos llamados a acudir desde nuestras diferentes trincheras y posibilidades, es el imperativo ético social de nuestro pueblo. Porque la paz, a la que aluden nuestros “filósofos” de la violencia significa seguridad, si pero para los intereses de un puñado de oligarcas nacionales y extranjeros, mientras el pueblo se bate entre la miseria y la embestida fascista que lo está masacrando desde diferentes frentes y de múltiples formas institucionales y no institucionales.

El descaro comienza a hacer gala en escena política y ahora el panorama se vislumbra un tanto descifrable con la intervención imperialista de EU en nuestro país, la cual ya se anunciaba desde antaño con la ultraderecha en los Pinos. Y ante esta realidad, desde las condiciones y circunstancias de cada hombre, cabe preguntarse con actitud crítica y honesta: ¿Qué papel ha jugado, juega y jugará el pacifismo en México? ¿Realmente podrá dar la solución de un verdadero cambio sustancial? Es responsabilidad de cada sujeto social el papel que decida desempeñar directa o indirectamente frente a esta ineludible realidad.

pdpr-epr



PARAMILITARISMO Y TERRORISMO DE ESTADO



La existencia del paramilitarismo como política de Estado no es un fenómeno nuevo en nuestro país. Debemos recordar que en los años de las décadas de los sesenta y setenta el Estado mexicano recurrió a la política de impulsar los grupos paramilitares vinculados con el narcotráfico para combatir al movimiento revolucionario y la base política de éste.

Dentro del contexto de una estrategia de contrainsurgencia desde entonces el Estado ha estado impulsando la formación y estructuración de grupos paramilitares que han ido adquiriendo diferente nombre, cuyo objetivo es ahogar en sangre y fuego la protesta popular, aniquilar físicamente luchadores sociales, opositores políticos y en especial revolucionarios que pugnan por la transformación de la sociedad.

Los Halcones, fue el grupo paramilitar, el instrumento del gobierno Federal y del Distrito Federal para reprimir el movimiento estudiantil-popular bajo el argumento de combatir la conjura comunista internacional; la Brigada Blanca, creada por el aparato militar para perseguir y aniquilar al movimiento revolucionario y la base política de éste; la existencia de bandas de pistoleros organizadas y dirigidas por políticos y policías para reprimir el movimiento campesino que exigía tierra para el hombre del campo; la formación de grupos de golpeadores para reprimir y asesinar los principales dirigentes del movimiento magisterial y popular en todo el país, son las diferentes versiones de los grupos paramilitares que operaron desde el amparo del Estado como parte de la política represiva y contrainsurgente en los años de las décadas de los 60's, 70's y 80's del siglo pasado.

Una de las características del paramilitarismo fue la creación y dirección de estos grupos desde el Estado por el aparato represor, en este caso la policía y el ejército que asumieron el papel de instrumento represivo y columna vertebral del Estado mexicano. La vinculación de estos grupos con el narcotráfico y la delincuencia organizada desde el Estado fue otra de sus características distintivas, grupos paramilitares y bandas que delinquían o que se dedicaban a la siembra y trasiego de enervantes eran lo mismo, no se debe olvidar que los narcotraficantes prestaban sus mansiones para que fueran habilitadas por policías, militares y grupos paramilitares como cárceles clandestinas donde se torturaba y asesinaba a los revolucionarios detenidos y desaparecidos en sus operativos policíaco-militares.

Con la irrupción del EZLN la estrategia de contrainsurgencia adoptada por el Estado mexicano adquiere otras características, se especializa la estrategia y táctica de la Guerra de Baja Intensidad (GBI), cuya característica es el impulso de grupos paramilitares pero con la denominación de "defensas civiles", categoría utilizada en los manuales de contrainsurgencia de origen norteamericano, en los hechos concretos adquirieron diferentes nombres conocidos en Chiapas, responsables de asesinatos políticos, desapariciones y masacres de ciudadanos que consideraban base política del EZLN.

Parte de esa política de contrainsurgencia están las masacres de Aguas Blancas, Guerrero; Acteal,

Chiapas; el Charco, Guerrero; y Agua Fría, Oaxaca.

Con la llegada del PAN a los Pinos la GBI siguió siendo el eje central de la política de los gobiernos de ultraderecha para contener el descontento popular, reprimiendo a éste con la asesoría e intervención cada vez más directa norteamericana. La proliferación de los grupos paramilitares en dichas administraciones es política de Estado y exigencia de la oligarquía mexicana.

Bajo el argumento pueril del combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada han hecho de la "seguridad pública" un fetiche para el desarrollo económico. En nombre de la protección de la población se han justificado crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada.

Desde el Estado a través del aparato represivo –policías, marina y ejército- se han impulsado la formación de grupos paramilitares, estructurados y dirigidos tanto por la policía federal, la marina y el ejército, éstos dos últimos los conforman con integrantes de los diferentes grupos de fuerzas especiales y de inteligencia que operan al amparo del Estado en aparente clandestinidad. Son éstos grupos que operan con tácticas especiales los principales responsables de los más de 50 mil muertos y de los más de cinco mil desaparecidos que ha arrojado la guerra de Calderón contra el narcotráfico.

A lado de estos grupos paramilitares formados por policías, marinos y militares que operan de manera extra oficial y extrajudicialmente, operan también grupos de paramilitares impulsados por empresarios, formados exprofeso para salvaguardar sus intereses políticos y económicos. Grupos encargados de aportar su cuota sangrienta en la "limpieza social".

Hay que agregar también los promovidos por las empresas transnacionales que han hecho lo mismo, sobre todo en el ramo de las maquiladoras y las compañías mineras. Las primeras para reprimir los intentos de la lucha obrera por reivindicar demandas laborares, responsables de los asesinatos de líderes y representantes sindicales, así como de los feminicidios; los segundos de los asesinatos de líderes campesinos, representantes ejidales y comunales que se oponen a la depredación de los recursos del país y del despojo de las tierras campesinas.

La existencia de grupos paramilitares que operan bajo el amparo y dirección del Estado mexicano siempre ha existido, sin embargo, la característica principal en estos momentos estriba en su diseño contrainsurgente, en función del terrorismo de Estado para tratar de inhibir la protesta popular y ahogar en sangre y fuego toda expresión de organización y lucha que esté fuera de la coorporativización institucional que se ejerce a través de instituciones del Estado y los partidos políticos.

La negación de la ausencia de grupos paramilitares por el gobierno federal y algunos gobiernos estatales, como es el caso de Veracruz, simplemente carece de validez, su negación insistente es la confirmación de la existencia de una política de contrainsurgencia en donde se contempla la creación de grupos paramilitares con diferentes denominaciones. Declaraciones y definiciones al respecto sólo constituyen una cortina de humo para desviar la atención respecto a la esencia del problema.

En el caso del gobierno de Veracruz, en concreto las declaraciones del gobernador Duarte, la sentencia de que los delincuentes siempre tienen un final trágico, la cárcel o la muerte, expresa las convicciones fascistas tanto de priistas como de panistas y de algunos individuos que se dicen ser de izquierda repiten sin reflexión alguna, indicando su enorme ignorancia política y desconocimiento de la esencia del problema que vive el país. La pena de muerte, la cadena perpetua

–como modalidad de la pena de muerte- o el asesinato extrajudicial de presuntos delincuentes no es la solución al problema, lo hemos afirmado con insistencia, a mayor "endurecimiento" de las leyes conducen a la criminalización de todo lo que no sea del agrado de las conciencias "de los hombres de bien", una política de criminalización de la desigualdad social, de la pobreza, del descontento popular, y sobre todo de las diferencias raciales, sociales y de pensamiento conduce al fascismo, y como respuesta a la violencia institucional un escalamiento de la violencia social que tiene raíces económicas y mientras no se resuelvan éstas el fenómeno seguirá presente en diferentes expresiones.

Ante la imposibilidad de imponer de tajo las exigencias fascistas desde el PAN, el PRI y el verde ecologista, el Estado mexicano a través de su columna central del aparato represivo –el ejército y la marina- proliferaron grupos de paramilitares creados desde el aparato represivo, encargados de ejercer el terror de Estado, de diseminar la violencia aparentemente desde la delincuencia para justificar la violencia institucional, la militarización de la sociedad y dar sustento al fetiche de la seguridad como condición de desarrollo económico.

Los grupos paramilitares conformados por elementos en activo y retirados del aparato represivo son los principales responsables del baño de sangre que existe en el país, son ellos quienes realizan las detenciones y ejecuciones extrajudiciales que vanamente se pretenden justificar como consecuencia del enfrentamiento entre delincuentes, los responsables de las miles de detenciones forzadas contra todo ciudadano que "parezca sospechoso", autores materiales de las detenciones extrajudiciales de miles de jóvenes por su apariencia, los cuales muchos de ellos luego "aparecen" asesinados y etiquetados sin más como delincuentes. Esta forma de ejercer la represión y en los hechos una política de limpieza social está diseñada para tratar de encubrir los crímenes de lesa humanidad, evitando manchar las instituciones del Estado y eludir a toda costa la responsabilidad de éste.

El combate a la delincuencia y la violencia institucional que de ella deriva en esencia es una guerra y una agresión permanente contra el pueblo con fines contrainsurgentes; violencia institucional formal e informal encaminada para infundir el terrorismo de Estado para inmovilizar políticamente a la sociedad y evitar la protesta y descontento popular.

Dentro de esta estrategia de contrainsurgencia el terrorismo de Estado se busca imponer como política de Estado con respaldo y justificación jurídica, he ahí la esencia de las diferentes reformas neoliberales que el Ejecutivo sigue insistiendo en su imposición para hacer legal lo ilegal, para proteger a los criminales de Estado, para mantener en la impunidad a los responsables de las más de 50 mil muertes y los más de cinco mil desaparecidos que existen en el país.

¿Qué hacer?, ¿Cómo responder desde las organizaciones del pueblo? La pasividad, la inmovilidad y la indiferencia es inaceptable por constituir un error político; también lo es la propuesta de anteponer "el amor y la paz" que significan perdón y olvido de los crímenes de lesa humanidad.

Es tiempo de aceptar que ante la violencia institucional, ante la ofensiva contrainsurgente contra el pueblo éste no sólo tiene el derecho, sino la obligación de recurrir a la autodefensa. Es tiempo de que en el campo de las organizaciones del pueblo y los luchadores sociales se den los pasos precisos para concretar la autodefensa y las acciones políticas de masas, para desenmascarar al Estado mexicano en su carácter represivo y exigir el castigo de los responsables materiales e intelectuales del baño de sangre que vive el país.

pdpr-epr

Seguro popular, causas y sus efectos

El problema de salud pública en nuestro país, nunca ha dejado de estar presente en la exigencia popular, el alto índice de enfermedades como diabetes, cáncer, obesidad… y en general todas las que derivan de la miseria han venido siendo una necesidad prioritaria que debiera ser atendida debidamente por ser un derecho constitucional estipulado en nuestra carta magna y en los organismos internacionales en materia de salud pública, no obstante lo anterior, en nuestro país este derecho se ha convertido en un privilegio al cual sólo tienen acceso un sector muy reducido de la sociedad, los demás están condenados a vivir en la insalubridad o buscar la atención por otros medios, desde los empíricos tradicionales hasta recurrir a los centros particulares.

Desde los tiempos del priismo al problema de la salud pública se le dio un tratamiento con negligencia estatal, sólo otorgando paliativos y regateando el derecho, recortando o desviando siempre los recursos en esa materia, paulatinamente se venía desmantelando al sector salud. Pero es desde el inicio de las administraciones panistas con Vicente Fox en su apertura que se manejó este derecho con mucha mayor displicencia, con una tendencia más descarada a la privatización de este derecho, recurriendo al posmodernismo en su lenguaje para



ocultar sus pretensiones de privatizar el sector salud.

Mediáticamente se empezó a ponderar el "*apoyo*" a la salud para las "*personas de más bajos recursos*", "*en riesgo*", "*con vulnerabilidad*"… que no contaran con seguro social, bajo esta lógica y dentro de este contexto se vendió la idea del "*Seguro Popular*" que fue anunciado como la panacea que resolvería el problema de la salud pública, omitiendo deliberadamente que el sector salud era la institución encargada de brindar este derecho como parte de la responsabilidad social que el Estado tiene para con sus gobernados.

Siguiendo dentro de esa lógica y dando continuidad a las pretensiones de la ultraderecha el gobierno del espurio Felipe Calderón continua con la mascarada del seguro popular, lo retoma y lo presenta como uno de los "mejores logros de su gobierno", al ver afiliado a más de 48 millones de Mexicanos, siendo un vil artificio mediático los beneficios de este afamado Seguro Popular, porque las condiciones y problemas de salud de

estos 48 millones de personas que se acercaron con la esperanza de poder recibir atención médica integral de forma gratuita lejos de mejorar han empeorado, dándose casos tan patéticos como el no cubrir ni una aspirina para el dolor de cabeza.

Engaño ultraderechista, porque la creación de este programa no fue, ni lo es con la intención de resolver el problema de la salud pública en el país derivados de la miseria y pobreza en la que se encuentra la mayoría del pueblo, su objetivo principal es la privatización de la salud, derecho constitucional al que todo mexicano debe tener acceso independientemente de su condición económica y social.

No tendría nada de novedoso seguir abordando lo del Seguro Popular sino es porque este ardid publicitario empieza a mostrarse tal cual es, las personas que acuden a consultas en hospitales públicos dependientes del sector salud, que son en los que se supone deben brindar el servicio o la atención de los afiliados del seguro popular, desagradable es su sorpresa cuando les dicen que la hospitalización y los medicamentos no los cubre el seguro y que por lo tanto tendrán que conseguir el medicamento con recursos propios y pagar hospitalización.

Además de mandarlos a hospitales o clínicas privadas a realizarse análisis o estudio donde con prepotencia les niegan la atención porque no han recibido el recurso económico del seguro, que únicamente les cubre el 50% de su costo, teniendo que pagar la otra mitad, podemos ver claramente para quién es el beneficio del seguro popular, aquí ya se aprecia nítidamente cómo se burlan y lucran con los derechos y conquistas sociales del pueblo, el burocratismo humillante a que es sometida la persona para poder registrarla en su lista de "beneficiarios" de seguro popular es una práctica "común".

El Seguro Popular es una estrategia de la ultraderecha para la privatización de la salud pública, ha tratado de hacer creer que este es un beneficio de salud de los más *"necesitados"*, destacando la supuesta *"gratuidad"* en cuestión de salud, hace referencia a la gratuidad de personas enfermas de cáncer, (de mama, cérvico-uterino, leucemia) y sida, cuando lo único que les cubre son algunas consultas y medicamentos, simples analgésicos y antigripales como el Paracetamol, Clorfenamina compuesta, ketoralaco... y si hay gratuidad hacia alguna de estas personas es porque han acudido a otras formas de conseguirla y no propiamente por el seguro popular.

El sistema se salud en México es un privilegio al que solamente tienen acceso los que cuentan con los recursos económicos suficientes para tales efectos, los problemas de mortalidad por falta de atención medica aún persisten o mejor dicho nunca han dejado de existir, la muerte prematura de menores por desnutrición o enfermedades que en su momento pueden ser curables existen, suman miles los casos de mujeres que mueren en el parto por atención deficiente o nula, en suma el pueblo se encuentra en la completa desatención en cuanto a salud médica se refiere, es un problema que al gobierno actual no le interesa resolver en beneficio de la amplia mayoría que es el pueblo.

Tratan de engañar al pueblo con programas asistenciales y con dadivas que en nada ayudan a resolver la situación de insalubridad de los

mexicanos, habrá quienes les crean sus falacias mediáticas por su ignorancia, pero también hay quienes con este tipo de programa y sus métodos de aplicación despiertan la conciencia social en contra del Estado y sus instituciones.

Habrá que decir también que de esta realidad no escapan ni los gobiernos emanados de las filas de la izquierda electoral, quienes han sucumbido a las exigencias de la ultraderecha y vienen aplicando masivamente el Seguro Popular con los mismos argumentos de la ultraderecha, ya no sólo haciendo eco de las pretensiones de esta, sino que ahora haciendo apología de los planes y programas conservadores y antisociales. ¿Dónde quedó lo progresista de la izquierda?

La afiliación al seguro popular ha sido utilizado por el gobierno de Calderón para subyugar a gobiernos locales que no son "*afines*" a su ideología y planes de gobierno, obligándolos a que acepten el Seguro Popular para que puedan ejercer el recurso federal destinado al rubro de la salud, eso es claro y evidente, pero de ninguna manera justifica la actitud timorata y sumisa que asumen los gobiernos que se dicen ser de izquierda, como en Chiapas, Guerrero y Michoacán por citar sólo tres ejemplos.

Ahora que se está en procesos electorales locales y ya entrados en el proceso electoral presidencial del 2012 Calderón pretende utilizar la afiliación al seguro popular y la aplicación de los recursos en el rubro de la salud como construcción de hospitales y demás infraestructura para incidir directamente en los resultados de esos procesos electorales, inaugurando hospitales con pomposos cubrimientos mediáticos donde no se jacta en cacarear los "resultados de su gobierno", Michoacán es un claro ejemplo de ello donde la hermana contiende por el gobierno del estado, y aunque diga que no intervendrá en los comicios electorales las visitas que realizó en calidad de presidente fueron para pretender beneficiar la elección de Luisa María en la contienda por la gubernatura del estado, es tanta la arrogancia y el cinismo que la inauguración de los hospitales se hizo sin estar equipados materialmente y sin personal médico contratado, lo que evidencia claramente la pretensión de este tipo de actos.

¿Qué hacer ante esta dramática realidad? En primer instancia hacer conciencia de ello analizando las causas, efectos y consecuencias, para dar paso a formas organizativas de lucha donde se haga válido el derecho a la salud, sin que se tenga que andar regateando un derecho constitucional que le corresponde al Estado otorgar, independientemente del gobierno que se encuentre representándolo. El Seguro Popular es una farsa, una mascarada para justificar y allanar el camino para la privatización de la salud pública, por ello no sólo debe ser rechazado, o denunciado, sino también emprender medidas y acciones concretas para frenar su avance, es inadmisible e injustificable su aceptación.

pdpr-epr

LA PRETENDIDA AMA DE CASA

El próximo 13 de noviembre de 2011 se llevarán a cabo elecciones para elegir dentro de la democracia burguesa, a diputados, gobernador y presidentes municipales de los 113 municipios que conforman el estado de Michoacán, las campañas "oficiales" hace rato que empezaron y como de costumbre las andanadas de promesas y buenas intenciones no se han dejado esperar, sin distingo de partido político electoral todos en su respectivo lenguaje prometen mejorar las condiciones sociales y económicas de sus electores. No obstante, en el fondo de cada una de sus "promesas" de campaña y su "propuesta de gobierno" los partidos electorales evidencian sus pretensiones políticas y sus verdaderas aspiraciones al llegar al poder, las cuales es necesario escudriñar para entender la realidad presente y prever el futuro inmediato de nuestro estado y país.

Antes de continuar es necesario dejar en claro que de nuestra parte en ningún momento hemos sido ciegos partidarios de la democracia burguesa, por el contrario hemos sido críticos de palabra y acción; convencidos de la farsa electoral hemos emprendido la lucha por la vía armada revolucionaria en un acto de congruencia y convicción política, desde luego siempre respetuosos de las diferentes formas de lucha que nuestro pueblo decide emprender en su perene lucha por la emancipación total.

Aclarado lo anterior procedemos a emitir nuestro juicio valorativo del proceso electoral que se está desarrollando en el estado de Michoacán, donde nuestro PDPR-EPR mantiene amplia



simpatía y una militancia convencida de la necesidad de la transformación por la vía armada revolucionaria.

Así mientras gobernantes y políticos de oficio recorren el estado en helicópteros y lujosas camionetas blindadas atascadas de "guardaespaldas" o discretamente custodiadas por "guaruras", en busca del cacareado voto electoral, nuestros militantes a pie y en la convivencia social se han dado a la tarea de escuchar y recoger la voz y sentir del pueblo en torno al proceso electoral, en barrios marginados, en las colonias populares, en los mercados, en los tianguis, en las calles, en las avenidas, en los pueblos olvidados, en las rancherías desoladas… en todos los municipios desde los más prósperos y cultos, hasta los más marginados y atrasados. Desde luego hay una amplia base social y política que hace posible lo anterior.

Existiendo en el pueblo michoacano un amplio y vasto juicio crítico y de desprecio hacia los

partidos políticos electorales en general, particularmente al PAN, y más en concreto a la familia Calderón Hinojosa, la cual es repudiada hasta por miembros de su propio partido, vaya hasta en su círculo familiar les parece *chocante* su actitud altanera. Pocos y extraños son los michoacanos que creen en las mentiras y poses mediáticas de la *Cacoa* como ampliamente se le llama ya a Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa. Expresión popular acuñada a partir de lo mierdosa que es, en palabras de un elector que cree en la “democracia”.

De antemano una disculpa a las verdaderas amas de casa que nada tienen que ver con la actitud grotesca y farsante de la Cacoa. Así las cosas la pretendida ama de casa en un arranque de oligofrenia se presenta mediáticamente ante los michoacanos como la madre ejemplar que revestida de poderes de Estado conducirá al gobierno como una familia de “disciplina y participación”, de “valores” con “orden” y un ensarta de pifias y estupideces que ofenden hasta al más incauto de los michoacanos.

La “ejemplar” ama de casa no se jacta de comparar los asuntos de gobierno con la labor de una ama de casa dedicada a sus labores domésticas y de madre conductora de mano dura, ha basado su campaña en la altanería, la pedantería y la verborrea mediática, lo que oferta son sus servicios como prestanombres de los empresarios que pretenden exponenciar sus cuotas de ganancia al lucrar con los recursos naturales y humanos de Michoacán; pretendiendo emular a la nefasta y fascista británica Margaret Thatcher, quien con un incisivo lenguaje cargado de odios y resentimientos sociales se hizo del poder para dar rienda suelta a sus convicciones fascistas.

La hermana de Calderón y su nefasto equipo de campaña incluidos sus asesores franquistas no conocen a la sociedad michoacana, creen que somos una masa despolitizada temerosa de sí misma que va a consumir su patética propaganda mediática de corte fascista donde el eje de toda su campaña gira en torno a la supuesta inseguridad que priva en el estado, y lógicamente se ofertan como los paladines de la seguridad. Cierto es que una ínfima parte de los michoacanos ha sido presa fácil del terrorismo de Estado impuesto en el estado a través de las operaciones conjuntas realizadas por el ejército y policía federal, marina y demás grupos castrenses y paramilitares, no obstante, la inmensa mayoría de los michoacanos lejos de intimidarse se muestra indignada y dispuesta a no permitir que llegue a gobernar el estado tan infame y nefasto personaje. Sus asesores y equipo de fascistas presuponen falsamente que polarizando la sociedad y orquestando una nefasta campaña de odio y rencor van a salir victoriosos y hacerse del poder.

Tanto es su descredito que en las avenidas, los semáforos, calles y colonias donde se presentan a repartir propaganda son increpados por el pueblo cuestionándoles la realidad que vive el país “por culpa de Calderón”, la propaganda que entregan nadie se las quiere recibir y los que lo hacen es para azotárselas en sus pies en señal de desprecio hacia el panismo, hecho que ha obligado a los panistas a entregar su propaganda ocultando el contenido a simple vista, por ejemplo los volantes los entregan doblados sin que se vea que es propaganda del pan, sin utilizar ellos las clásicas playeras estampadas con propaganda panista en un intento por pasar desapercibidos ante el pueblo y

repartir la propaganda que yace por miles almacenada en sus bodegas.

La opinión y sentir del pueblo michoacano recogida por los militantes de nuestro partido y ejército dista mucho de favorecer a la camarilla de neofascistas agrupados en torno a la familia Calderón, la inmensa mayoría de los michoacanos repudia y desprecia a la familia Calderón Hinojosa. He aquí algunas de las expresiones vertidas por el pueblo a pregunta expresa de si votarían por Luisa María Calderón Hinojosa, a parte de un rotundo ¡no! la inmensa mayoría agrega: *"es una fascista de mierda"*, *"Pinche vieja presumida"*, *"malditos asesinos"*, *"nomas anda gastándose nuestro dinero en sus pinches guaruras, cómo vamos a confiar en gente droga y mocha…* hubo hasta quienes revelaron algunos "secretos" del pasado oscuro de María Luisa, como por ejemplo su afición a la cocaína y otras drogas cuando estudiaba la preparatoria en el colegio, hay quienes revelan los "reventones" de juventud a los que era ferviente invitada donde había de todo desde vino hasta drogas, a las que hoy fervientemente combate su hermano y ella desea continuar.

Por lo anteriormente expuesto se vaticina que difícilmente la Cacatúa ganará en Michoacán, necesita más que un fraude para imponerse a los michoacanos, porque ya de todos es conocida su pretensión de orquestar y justificar un fraude mediáticamente, de hecho así es como en la precampaña le ganó a su contrincante Marko Cortés con un cínico y descarado fraude del cual su propio compañero de partido se quejó y acusó de recibo, resignándose a que le dejaran la presidencia municipal de Morelia. Así qué como ya es tradición familiar, los Calderón Hinojosa pretenden ganar con un fraude al estilo Felipillo en el 2006.

De hecho ya están orquestando ese fraude a través de las encuestas ficticias que están realizando, para con ello tratar de justificar su supuesta ventaja que les lleva a sus contrincantes, una de las modalidades que están utilizando para la realización de estas encuestas con las que pretenden justificar el fraude es contratar a gente desempleada y entregarles un "formato" que tienen que llenar con las siguientes interrogantes al encuestado ¿Cuál es su nombre?, ¿Tiene credencial de elector?, ¿coincide su actual domicilio con el de su credencial?, acto seguido el encuestador se identifica como parte del "equipo de Campaña de cocoa" y que con dicha encuesta se conocerán las necesidades de los michoacanos para que sean tomadas en cuenta por la candidata del PAN. Además para que el encuestador pueda cobrar su sueldo tiene que entregar por lo menos 10 formatos llenos, si no, no les pagan los $ 100. ¿Qué uso le van a dar a los datos recabados en tales encuestas? Seguramente los utilizaran para tratar de realizar o justificar el fraude que pretenden ejecutar en el estado de Michoacán.

Dada esta realidad decidimos preguntar al pueblo ¿Qué harían en caso de que la hermana del espurio se impusiera a través de un fraude? La respuesta no se hizo esperar, la mayoría se muestra indigna y dispuesta a no permitirlo, he aquí algunas expresiones: *"entonces si se va a poner la cosa cabrona"*, *"a sacarlos por la fuerza del pueblo"*, *"de una vez que se suelte la tracatera para colgar a esos hijos de la chingada que nos están chingando, ya nos tienen hasta la madre"…* así responden los michoacanos de diferentes extractos sociales que lejos de tragarse la

propaganda mediática del panismo están tomando conciencia de la realidad y de las dimensiones del peligro que representan los fascistas para la humanidad.

Del PRI, como el pueblo sabe, hay que esperar más de lo mismo, miseria, opresión, represión, militarización… con la única diferencia de que ellos son más sutiles que el PAN, pero igual de criminales y corruptos, baste decir que son ellos en complicidad con el PAN los responsables de la terrible desgracia social que padece hoy el pueblo de México, la pobreza y la miseria con todo y sus consecuencias como la violencia.

Por lo que destaca Fausto es por su gran pericia para el doble discurso a la antigua usanza del PRI, su campaña se basa en presentar los logros de su gestión en la presidencia municipal de Morelia y lucrar con las necesidades y derechos del pueblo, pretendiendo hacer de los derechos constitucionales un botín político del cual él sea quien decida cómo y a quién se debe repartir.

Por ejemplo los bonos educativos y vales de medicina que dice van hacer una realidad con su gobierno en referencia a las propuestas del Verde Ecologista que abandera como parte de su coalición, es un vil engaño puesto que son derechos constitucionales que están consagrados en nuestra carta magna en el apartado de las garantías individuales, por lo tanto no están sujetos a negociación o regateo, lo que sí representa y evidencia esta "formidable" propuesta es la actitud complaciente y servil para con los empresarios que están empujando a la privatización de la salud y la educación en el reparto del país que está dando en favor de la oligarquía nacional y transnacional.

Por otro lado, aunque el estado es considerado en el plano nacional el bastión perredista, cierto es que las dos gestiones perredistas no han podido satisfacer las expectativas de un pueblo que en la década de los ochenta se volcó a las calles en demanda de democracia y libertad y que justamente el PRD se la ofreció de manera "pacífica", conminando a los michoacanos a que guardaran las armas y confiaran en la "democracia".

Hoy ya en la segunda década del siglo XXI a los michoacanos y al pueblo de México en general caro ha salido haber confiado en la vacua palabra democracia, una democracia burguesa donde los políticos de oficio en las campañas electorales se desgarran las vestiduras en la justa por el poder, pero que llegado a éste los otrora enemigos políticos se estrechan las manos y hasta organizan fastuosas fiestas donde convergen, brindan y ofertan sus servicios los de la llamada "clase política", mientras que el pueblo y sus muertos siguen igual o peor que en la dictadura priista.

Resulta grotesco y es sumamente ofensivo para la memoria de los perredistas que ofrendaron su vida en nombre de la "transición democrática", que un represor y asesino de perredistas en los sangrientos procesos electorales finales de los 80 y principios de los 90s como Genovevo Figueroa Zamudio hoy esté siendo abanderado por el PRD, para contender por la presidencia municipal de Morelia. ¡Que cinismo y que desvergüenza! A este nefasto y sanguinario personaje las dos gestiones perredistas lo han premiado con la titularidad de la Secretaria de Turismo, tejiendo desde ahí este operador de la oligarquía local, una red de complicidades para avalar y ejecutar un enorme despojo de tierras y recursos naturales a

comuneros y ejidatarios de diferentes municipios del estado.

La democracia burguesa y la lucha electoral hasta ahora sólo ha servido para que paulatinamente se haya venido consolidando en el poder una camarilla de gente sin escrúpulos que con tal de garantizar sus intereses personales se venden al mejor postor, es el caso de los políticos de oficio que fungen como los testaferros de la oligarquía, quien es un grupúsculo de acaudalados que impone su voluntad sobre la de la inmensa mayoría del pueblo mexicano. Esta oligarquía es cada vez más voraz y hábil para garantizar sus mezquinos intereses, ahora con los llamados "pactos de gobernabilidad" imponen su "agenda" a los políticos de oficio de todos los partidos políticos electorales.

Esa es la razón por la cual el pueblo se muestra con un juicio crítico y de desprecio hacia los partidos políticos electorales, ha venido tomando conciencia de la falacia que representa la tan cacareada democracia; ello explica también el creciente abstencionismo, la incredulidad y el hartazgo total hacia los partidos políticos electorales, no obstante a esta realidad, quienes acuden a las urnas a depositar su voto lo hacen convencidos de que no hay mucha diferencia entre los partidos políticos electorales, resignándose a por lo menos elegir a su verdugo, quien buscan sea el menos peor, mientras llegan mejores tiempos para la verdadera transformación.

Llegue quien llegue a la gubernatura los intereses de la oligarquía local, nacional y transnacional estarán garantizados pues todos los contendientes firmaron un acuerdo de gobernabilidad, donde se comprometen a impulsar una agenda mínima de gobierno gane quien gane, es decir, se comprometieron a salvaguardar los intereses de la oligarquía local y nacional.

Así de cruda es la realidad y el próximo 13 de noviembre Michoacán estará bajo la mirada del país y del mundo entero, no sólo están en juego la gubernatura del estado, sus municipios, las diputaciones y demás puestos burocráticos, la ultraderecha se gastará su último cartucho en fraudes electorales y la tentación de golpe de estado siempre ha estado presente en las maquiavélicas mentes de los panistas fascistas. El proceso electoral de noviembre podría ser un ensayo o escenario de lo que ocurra en el 2012 en las elecciones federales.

Por su parte el movimiento popular independiente debe prepararse para el escenario poselectoral, que se tornará difícil, en razón de que gane quien gane va continuar con la política entreguista y complaciente para con la oligarquía local, seguramente y a pesar del discurso seguirá la línea neoliberal de privatizar todo, desde la industria, los servicios, hasta la educación y cultura. Las banderas de la lucha popular independiente adquirirán mayor relevancia, debe ser parte de la táctica a seguir en la presente etapa de lucha.

Michoacán en la historia ha sido cuna y semillero de revolucionarios, hoy no es la excepción, la familia Calderón Hinojosa será derrotada en sus propios terrenos, y si acaso se empecinan en mantenerse en el poder con el puntal de las botas y bayonetas militares, seguramente se enfrentaran a la voluntad popular de combatir en todas sus expresiones y modalidades.

pdpr-epr



VERACRUZ ¿SEGURO O INSEGURO?

Desde la administración de Miguel Alemán los gobiernos estatales priístas sostuvieron el argumento de la inexistencia del fenómeno de la delincuencia organizada y sus consecuencias nefastas, mantuvieron la tesis de que la delincuencia era externa, que grupos delincuenciales venían de otros estados a delinquir a Veracruz.

De nuestra parte, como militantes del PDPR-EPR y nuestras respectivas instancias de dirección, sostuvimos la tesis política de que *el fenómeno de la delincuencia tenía origen desde y para el Estado*, que carecía de fundamento los dichos de los diferentes políticos de oficio que eran secundados por empresarios de toda índole.

A la distancia se ha venido confirmando con diferentes acontecimientos que la delincuencia organizada tiene origen en el Estado y para el Estado. La delincuencia organizada como fenómeno social propio del capitalismo y su descomposición producto de las contradicciones inherentes a tal modo de producción que finca su existencia en la opresión política y la explotación económica.

El argumento de que la delincuencia venía de otros estados quedó sin sustento y afloraron los múltiples hilos que conducen a las diferentes instituciones y funcionarios de dichos gobiernos.


Dos neofascistas posando para la "buena imagen"

A tiempo denunciamos también que dentro de esta trama estaban involucrados hombres del sistema como Yunes Linares que se ha enriquecido al amparo del Estado y las redes de delincuencia en sus diferentes modalidades.

Y en la medida que se negaba la existencia del fenómeno de la descomposición y la delincuencia con raíz en Veracruz los gobiernos priístas se fueron plegando a las exigencias del gobierno federal, comprobándose también que en la defensa de los intereses oligárquicos cierran filas por representar los mismos intereses de clase.

Esta absurda negación de la realidad se constituyó en política de gobierno hasta que fue imposible ocultarla para dar paso en el actual gobierno de Duarte que al igual que el gobierno federal se esfuerza por presentar el problema de la seguridad pública como el principal, impulsando también la política de seguridad pública como fetiche para el desarrollo en el estado, al igual de

pretender fincar éste también sobre la base de la desgracia social que generan los desastres naturales.

Respecto a la política de seguridad el actual gobierno estatal se plegó totalmente a la política calderonista, reflejando con ello también la identificación ideológica y política por una salida fascista a los problemas sociales. La militarización de la sociedad y de la geografía estatal es a tal grado que se vende la idea de que con ello automáticamente llegará el desarrollo económico y social.

El resultado está a la vista, la existencia de cientos de desaparecidos, entre ellos más de doscientos jóvenes; cientos de detenciones y ejecuciones extrajudiciales; y el encarcelamiento de innumerables ciudadanos presentados como presuntos delincuentes, que poco a poco ha ido trascendiendo que la mayoría de ellos son inocentes.

Este fenómeno se vio potenciado con la llegada de los operativos policíaco-militares en coordinación con el gobierno federal. Previo a la llegada y operatividad de las fuerzas federales estos crímenes de Estado ya estaban al orden del día, así como la ola de extorciones a nombre de los míticos zetas a pequeños y medianos comerciantes, empresarios y productores. En el gobierno del "tío fide" era secreto a voces que los extorsionadores tenían origen en las estructuras de gobierno, que no es lo mismo que argumentar la infiltración de las instituciones por la delincuencia, el mecanismo es en sentido contrario, desde las instituciones del régimen se promueve la delincuencia organizada, fuente de enriquecimiento y encumbramiento político y económico.

Sin embargo, a la llegada de las tropas federales y el impulso de los operativos policíaco-militares bajo el operativo Veracruz seguro, la violación de los derechos humanos tuvieron un incremento altísimo; las detenciones-desapariciones se aumentaron a cientos; las detenciones-ejecuciones extrajudiciales fueron inocultables; y las cárceles se empezaron a llenar de presuntos culpables, producto de la fabricación de expedientes judiciales y criminales para presentar resultados.

En las calles para cualquier veracruzano con el que se tenga confianza te dirá "qué curioso, nomás llegó la marina y los militares y aumentó la delincuencia", y efectivamente, la ola de extorsiones, los asesinatos producto de los "ajustes de cuentas" proliferaron, coincidencia que confirma lo sostenido en estas páginas, la violencia que se vive en el país la propicia el mismo Estado.

Probado está por diferentes denuncias públicas y testimonios de amigos, familiares y ciudadanos de las víctimas que señalan a las policías municipal, estatal y federal los responsables de las

detenciones extrajudiciales que se dieron previo a las dos masacres de decenas de personas en Veracruz-Boca del Río, hecho que hoy no pueden ocultar las autoridades estatales y federales.

Duarte en su incapacidad como político de oficio demostró su verdadera concepción fascista al sostener que los delincuentes siempre tienen un final trágico, la cárcel o la muerte. Y en efecto sobre esa lógica está operando todo el aparato represivo. A la fecha son cientos de jóvenes que son detenidos sólo por el hecho de vestir o tener apariencia diferente a lo que los conservadores consideran buena persona o buena conducta.

Los operativos policíaco-militares formales e informales, están diseñados para ejercer de facto un estado de sitio, la anulación de garantías individuales y la violación de los derechos humanos.

Como parte del fetiche de la seguridad pública se creó la "nueva" policía estatal, no obstante ésta es una burda mentira mediática, a la mayoría de los policías se les re contrató y el parque vehicular fue repintado. Mismo personal, misma infraestructura pero ahora bajo la tutela y dirección de las estructuras federales.

En el reclutamiento de elementos para la "nueva" policía vemos la gleba moderna al reclutar a la fuerza de hambre, a la de "a güevo" por el desempleo como señala la flota. Cuando un gobierno sólo ofrece a la juventud como trabajo engrosar las filas del aparato represivo habla del grado agudo de descomposición del régimen y del modo de producción.

Flota, la solución no está en el endurecimiento de las leyes, en el incremento desmedido de las penas carcelarias para enfrentar la delincuencia organizada desde y para el Estado y su consecuente violencia. La pena de muerte, la cadena perpetua y las penas carcelarias absurdas de más de cien años no resuelven nada, sólo contribuyen al escalamiento de la violencia social y la violencia institucional formal e informal.

La violencia social e institucional tiene origen en las contradicciones inherentes al sistema capitalista, producto de la existencia de la propiedad privada que engendra desigualdad social, mientras no se resuelva ésta la violencia social y del Estado seguirá siendo un fenómeno propio del régimen neoliberal. Mientras exista la desigualdad social, existirá pobreza y mientras ésta sea una realidad la descomposición social será un fenómeno que cada vez se agudizará.

Ante este panorama, la organización fuera de los marcos de la coorporativización es una necesidad política, traducida en la formación de organizaciones de carácter independiente que impulsen la lucha contra la violencia estatal. A la par debe esta la defensa colectiva por medio de la autodefensa como táctica de lucha.

pdpr-epr

TERRORISMO IMPERIALISTA PARA SUBYUGAR A LOS PUEBLOS DEL MUNDO

A partir de la guerra de rapiña contra Irak y la intervención militar en Afganistán bajo el argumento de combatir el terrorismo internacional quedó al descubierto un nuevo proceso de colonialismo impulsado por el bloque imperialista, hegemonizado por el imperialismo norteamericano y secundado por el Inglés.



Marina imperialista atacando al pueblo libio

El argumento de la lucha contra el terrorismo internacional, la defensa de la democracia y los derechos humanos han sido el argumento para justificar política y jurídicamente la intervención militar, la guerra de rapiña, la ocupación militar y el derrocamiento de gobiernos legítimos ante sus pueblos.

Al desgastarse el argumento antiterrorista mundial hoy el proceso neocolonial se justifica bajo el argumento pueril de la protección a la población civil para evitar un baño de sangre por los gobiernos dictatoriales, se enarbola falsamente la defensa de los derechos humanos y se vocifera a favor de la democracia –democracia sin apellido- para justificar burdamente la intervención militar imperialista y las guerras de rapiña en función de imponer un régimen internacional neocolonial.

En un mundo hegemonizado por el bloque imperialista la defensa de los intereses del capital y la oligarquía internacional son cada vez más descarados y burdos, hegemonía que se expresa en el control de los diferentes organismos internacionales en función de la defensa y preservación de los intereses del capital internacional, del modo de producción capitalista y del imperialismo.

Las resoluciones de la ONU contra el Estado soberano de Libia y su gobierno legítimo justificaron la guerra neocolonial orquestada y ejecutada por el bloque imperialista. La OTAN es quien verdaderamente lleva la campaña militar; los "rebeldes" son mercenarios contratados por los países imperialistas europeos, cuyo objetivo no es la conquista de la democracia y el derrocamiento de un "tirano", sino la apropiación de los grandes yacimientos de petróleo y recursos naturales del

pueblo libio e imponer un régimen subordinado totalmente a los intereses del capital internacional.



Amparados en una campaña mediática en favor de la democracia se justifica la intervención militar imperialista y toda la cauda de crímenes de lesa humanidad que conlleva. Campaña mediática encaminada a distorsionar una realidad, en donde el objetivo principal es etiquetar a un gobierno legítimo como dictatorial, negándole al pueblo libio el derecho a la autodeterminación de su desarrollo histórico. En ese contexto de guerra propagandística hay quienes han perdido el rumbo al grado de inventar supuestas atrocidades cometidas por el gobierno libio, mientras se calla ante las atrocidades y los crímenes de lesa humanidad que comenten los mercenarios agrupados en el autollamado Consejo Nacional de Transición.

Ante el proceso de derechización en el mundo de la sociedad y la despolitización de amplios sectores de ésta, la campaña mediática ha facilitado la desinformación y la incomprensión de los verdaderos objetivos que los países imperialistas perciben bajo las banderas de la defensa de la democracia, que en esencia es la defensa de la democracia burguesa en su máxima expresión, que justifica la opresión política y la explotación económica por el capital, que eleva la explotación del hombre por el hombre a una deshumanización conduciendo a la humanidad hacia un proceso neofeudal en el terreno de las ideas.

En la actualidad existe una campaña de terrorismo imperialista cuyo objetivo es subyugar a gobiernos y pueblos que han decido transitar por un desarrollo económico y político diferente al deseado del bloque imperialista. Efectivamente la humanidad asiste a un nuevo proceso de colonialismo en donde viene una nueva oleada de dictaduras y gobiernos de filiación fascista con todo y sus consecuencias nefastas para la humanidad. Bloque hegemonizado por el imperialismo norteamericano, que pretenden resolver la actual crisis estructural del capitalismo por medio de políticas militaristas, las guerras de rapiña y las intervenciones neocoloniales para garantizar un saqueo interminable de los recursos y riquezas de los pueblos que pretenden subyugar.

Lo que empezó como las revoluciones mal llamadas jazmín, una expresión de la intervención extranjera apoyándose en justos reclamos populares terminó en la instauración de dictaduras con rostro institucional y democrático, gobiernos y regímenes instaurados para abortar el proceso de lucha de clases que empujaba al derrocamiento de las dictaduras despóticas para transitar por un desarrollo diferente impuesto por el imperialismo. Estas revoluciones son el ejemplo claro de lo limitado que significa de manera abstracta por la democracia.

Libia es un caso diferente porque no existían las mismas condiciones socioeconómicas y políticas para la intervención abierta, se recurrió a la conjura internacional para crear un escenario a modo, en donde se calumnió y desacreditó al régimen y al gobierno libio, así como el liderazgo moral de Gadafi para presentarlo a nivel internacional como un régimen dictatorial promotor del terrorismo y así de esa manera justificar la intervención del imperialismo vía la OTAN.

Así como han evolucionado los acontecimientos, todo apunta que Libia es un eslabón para la guerra de rapiña y el nuevo proceso neocolonial impulsado por el bloque de los países imperialistas, que eufemísticamente es lo mismo cuando se refieren a los países desarrollados o al Grupo de los Ocho. La guerra contra el pueblo libio anuncia una nueva escalada de la política intervencionista contra Corea del Norte, Irán, Cuba, Bolivia y Venezuela, entre otros.

Dentro de este contexto internacional el imperialismo norteamericano apunta su maquinaria de guerra contra Irán. El "complot iraní desbaratado" para atentar en territorio norteamericano contra intereses de Arabia Saudita con ayuda de presuntos narcotraficantes mexicanos es una sucia y burda maniobra que retoma la vieja tesis del terrorismo internacional coludido con el narcotráfico, tan absurda e ilógica que cualquier análisis serio encuentra su perversidad mediática e injerencista para justificar una ofensiva militar contra el pueblo iraní y su gobierno.

Este burdo montaje trae implicaciones para nuestro país, una vez más se demuestra el papel subordinado y servil del gobierno calderonista para con los intereses del gobierno norteamericano y sus pretensiones, entre ellas la justificación de la intervención militar de manera directa y abierta ya sin el consentimiento del gobierno entreguista de México, que en estos momentos juega el papel de punta de lanza del imperialismo norteamericano contra los pueblos y gobiernos progresistas del mundo.

pdpr-epr

COMUNICADOS DEL PDPR-EPR:

AL PUEBLO DE MÉXICO

A TODAS LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A TODAS LAS ORGANIZACIONES POPULARES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS

¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

La masacre de Aguas Blancas que arrojó el asesinato de 17 campesinos indefensos de la Organización Campesina de la Sierra Sur del estado de Guerrero (OCSS), cuyo único "delito" fue el pedir la solución al cumplimiento de la entrega de apoyos agrícolas, ha significado desde el Estado: el aniquilamiento de toda aquella expresión del pueblo que se atreva a protestar o manifestarse para exigir sus derechos ciudadanos; la fabricación de delitos para justificar la política de represión, porque Aguas Blancas es parte de las masacres que se dieron en el país como la de Acteal en Chiapas, Agua Fría en Oaxaca y El Charco en Guerrero.

Para el Estado mexicano, Aguas Blancas es la continuidad de la impunidad hacia los autores materiales e intelectuales que hoy se siguen desempeñando en el aparato represivo; la creación de figuras político-jurídicas inoperantes que sólo fungen como medida cosmética al régimen; la burla descarnada y descarada hacia los familiares de las víctimas a quienes prometieron resarcirles un daño irreparable: la pérdida de sus seres queridos con una "ayuda humanitaria" que nunca llegó, becas que dejaron de pagarse, pensiones suspendidas, dádivas selectivas que terminaron por romper los lazos fraternales que los unían.

Y por desgracia, un modus vivendi para vivales y leguleyos que medran con el dolor de las víctimas por la ausencia forzada de los seres queridos, que siguen padeciendo viudas y huérfanos.

Pero Aguas Blancas también ha significado la continuidad de la resistencia y la voluntad popular de combatir, porque este es un pueblo que a pesar de ser reprimido no ha sido doblegado y a pesar de la brutalidad y la intención perversa del Estado de paralizarlo y aniquilarlo, ha venido respondiendo combativamente, generando variadas formas de lucha y exigiendo la solución de viejas y nuevas demandas que gobiernos priístas y panistas se niegan a resolver.

El estado de sitio que anula de facto derechos constitucionales, los operativos policiaco-militares que violan sistemáticamente derechos humanos, las detenciones arbitrarias que han llenado las cárceles de inocentes y presuntos delincuentes, las ejecuciones extrajudiciales, los miles de desaparecidos por motivos políticos y sociales son una expresión del recrudecimiento de la represión que el Estado mexicano ha decidido implementar, un indicativo de las medidas pro fascistas que este gobierno está empeñado en imponer violentamente. En pocas palabras una agresión policiaco-militar permanente contra todo el pueblo.

Las manifestaciones de rechazo y condena al gobierno antipopular por sus medidas represivas tienen diferentes expresiones, desde la rabia contenida hasta la acción política de masas, desde la impotencia

ahogada hasta el grito desgarrador de condena política, desde la resistencia civil pacífica hasta la lucha de resistencia popular combativa; todas son producto del descontento popular, ambas condenan la desigualdad social, exigen el fin de la política militarista y de la supuesta lucha en contra de la delincuencia organizada que desangra y consume las vidas de miles de jóvenes. Nos enfrentamos a políticas neo maltusianas para el control de la población.

Si doloroso resulta asimilar el crecimiento del número de víctimas de la política militarista de Felipe Calderón Hinojosa, más doloroso es acompañar las manifestaciones de resistencia civil pacífica que vuelven a recorrer caminos con resultados inciertos por la necedad de este gobierno; cierto que no debemos dejar caer esta expresión de lucha, todos debemos remontar el dolor, la impotencia contenida, la rabia prolongada con acciones políticas de masas que no sólo desenmascaren al gobierno sino que lo obliguen a resolver las necesidades, las demandas populares y dar por terminada su política militarista.

Recurramos a la memoria histórica, analicemos pacientemente la realidad nacional y asimilemos las experiencias vividas en las diferentes etapas de la lucha de clases en el país para reducir los costos en vidas humanas en la lucha popular y evitar la frustración, el desánimo, la desesperanza, la fragmentación, la contención de la voluntad popular de combatir. Se trata que todos asimilemos la necesidad histórica de combinar todas las formas de lucha para evitar quedar reducidos a una sola que limite la iniciativa y la creatividad popular, son tiempos de impulsar y generalizar la resistencia popular combativa.

El hecho de que el jefe del Ejecutivo se sentara en Chapultepec para un diálogo, con la parte del pueblo que hoy exige el fin de su política militarista, significa un logro del pueblo en resistencia, de las víctimas y los directamente agraviados que hoy desenmascaran, una vez más, el carácter represivo de este gobierno. Desnudaron al jefe del Ejecutivo exponiéndolo en su verdadera dimensión, en un encuentro en donde las respuestas a las exigencias populares estaban prefabricadas para no dar solución e intentar desactivar esta expresión de resistencia y descontento popular, para vanagloriase con el gobierno norteamericano de que aun el panismo mantiene el control político y económico en el país.

La política militarista está sentando sus reales y lo que priistas y panistas no se atrevieron a realizar, hoy lo instrumentan desde la izquierda institucionalizada con su política de “tolerancia cero”. Al formalizar un estado de sitio en todo el país se tiene ya como resultado, mayor generalización de la corrupción e impunidad; un avasallamiento policiaco militar de la población y un desbrozamiento del camino para facilitar las pretensiones de la ultraderecha de imponer y consolidar un Estado policiaco militar en el país. Con los operativos policiaco-militares implantados por la Conago los cuerpos represivos ven en cada ciudadano un presunto delincuente.

Toda aquella persona de izquierda que olvide que el principal problema del país es la miseria y la desigualdad social y no la delincuencia, que plantee como objetivo prioritario la seguridad pública como condición necesaria para el desarrollo actúa bajo el fetiche legitimador de los intereses oligárquicos y

convalida las pretensiones de la ultraderecha. En consecuencia los pasos que va dando son en dirección contraria a la izquierda.

¡Hermanas, hermanos, camaradas!

Aguas Blancas para nosotros significa la respuesta del pueblo contra la represión; una forma de lucha necesaria ante la criminalización del descontento popular; una respuesta de autodefensa de las masas contra los crímenes de Estado; una respuesta organizada a la represión generalizada; una propuesta revolucionaria para ser frente a la represión del Estado y, una acción política de masas como parte de la autodefensa popular, persistencia en la lucha revolucionaria y compromiso que hoy refrendamos.

¡ESTAMOS PRESENTES!

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!

¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR! ¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITE CENTRAL

DEL

PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO

PDPR

COMANDANCIA GENERAL

DEL

EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

CG-EPR

Año 47.

República mexicana, a 28 de junio del 2011.

A LA FAMILIA DEL MAESTRO MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

A LA FAMILIA PERIODÍSTICA HONESTA Y CONGRUENTE

AL PUEBLO DE MÉXICO

HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS:

En el devenir histórico de todos los pueblos existen horas aciagas como lo son aquéllas durante las cuales se pierden a sus más representativos hombres, a aquellos que han logrado sobresalir no por la posición económica alcanzada de cualquier manera sino por su compromiso con las luchas más sentidas de su tiempo, que jamás se separaron de sus raíces y consecuentemente de su pueblo.

Este es el caso del maestro Miguel Ángel Granados Chapa, hombre comprometido con su pueblo y congruente con sus ideales.

Por esta razón, hemos de resaltar uno de los compromisos que adquirió y que pinta de cuerpo entero su valía.

El 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca fueron desaparecidos nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez razón por la cual exigimos a los gobiernos estatal y federal de Ulises Ruiz Ortiz y Felipe Calderón Hinojosa respectivamente, su presentación con vida sin obtener respuesta, por lo que procedimos a realizar acciones político militares a manera de presión para que nuestros compañeros Edmundo y Gabriel dejaran de ser torturados y fuesen presentados con vida de manera inmediata, exigencia para la cual tampoco hubo respuesta.

Un año después nuestro Partido democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) convocó a un grupo de intelectuales y luchadores sociales comprometidos con la justicia para que desarrollaran las actividades y acciones conducentes necesarias para que fueran presentados nuestros compañeros.

En este selecto grupo incluimos precisamente al maestro Miguel Ángel Granados Chapa, cuya trayectoria conocíamos de tiempo atrás y con quien hubo un mal entendido superado por su gran capacidad de análisis: se le envió al maestro un Comunicado en la forma que acostumbrábamos -a través de un ramo de flores- para evitar que nuestros compañeros sufrieran riesgos mayores. Este detalle, fue tomado por el maestro Granados Chapa como una amenaza a su vida.

La lucidez del maestro Miguel Ángel Granados Chapas, el tiempo y la explicación que se le dio sobre esta situación, como siempre lo hemos dicho, atemperó los ánimos y colocó los hechos en donde correspondían con el resultado por todos conocidos: la convocatoria de parte del partido y su respuesta comprometida como la de todos sus integrantes a ser parte de lo que actualmente se conoce como “Comisión de Mediación”.

Su participación en la Comisión de Mediación contribuyó a dar certeza jurídica a los planteamientos de la misma y corroboró una vez más su amor por la justicia y el irrestricto respeto de los Derechos Humanos razón por la cual no podríamos dejar de reconocer su compromiso con los mismos ni dejar de mencionar lo que ningún medio de comunicación se ha atrevido: su compromiso con la presentación de nuestros

compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en particular y de todas las víctimas de tan deleznable delito de lesa humanidad, por lo que estamos profundamente agradecidos.

Tampoco podríamos, ni podemos dejar de reconocer la valentía con la que enfrentó el mal que lo aquejó ni el estoicismo con el que enfrentó su final, semejante al estoicismo de quienes han soportado la tortura infligida por esbirros del Estado y nos produce un dolor inexplicable que nos lleva a continuar el tratar de imitar su congruencia por lo que le decimos a su familia que hombres como él son imprescindibles, que su dolor lo sentimos nuestro, que su compromiso con su pueblo también es nuestro, que la persona física desaparece pero que su amor por la justicia, la verdad y la humanidad prevalecerá, estamos seguros, retomada por cada uno de ustedes su familia, en cada periodista honesto y congruente que lo conoció, en cada luchador social y en nosotros. Así pues reciban por este conducto un abrazo fraterno y nuestra solidaridad.

¡Hasta siempre, maestro Miguel Ángel Granados Chapa!

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAÍS!

¡POR LA PRESENTACIÓN DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR! ¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITÉ CENTRAL

DEL

PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO

PDPR

COMANDANCIA GENERAL

DEL

EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

CG-EPR

Año 46.

República mexicana, a 17de octubre del 2011.

ARTE Y CULTURA

Poesía

Bandera de lucha

No es el verde de los bosques
de los llanos o las praderas,
es el viento que ondea en olas
el verde vivo de nuestra bandera.

No es la roja alborada
que se distingue en el horizonte,
es la estrella que ilumina al monte,
la estrella roja de nuestra bandera.

Y ese estruendoso grito
no es de llanto ó de dolor,
sino de euforia y de aliento
que lanza el pueblo trabajador.

Es el estruendo que anuncia el día
y el momento para luchar,
nuestra bandera gloriosa ondea,
con nuevos vientos de libertad.

Son los hombres que ya se aprestan
por la lucha socialista,
por la justicia y la libertad
hay que formar comunistas.

Son combatientes, no mercenarios
con valores éticos y osadía,
verdaderos hombres revolucionarios,
los que se suman a nuestras filas.

Porque el camino de la justicia
y el de la vida con libertad,
es uno solo y lo caminan
los revolucionarios de verdad.

Por la verdadera libertad
luchemos contra el imperialismo,
enarbolando las banderas
y la lucha del socialismo.



República Mexicana,
Octubre de 2011